

ECONOMÍA Y TRABAJO

Gobierno y agentes sociales ceden en favor de la prórroga de los ERTE

Escrivá y Garamendi acuerdan un reajuste de las exoneraciones que los sindicatos secundan

CLAUDI PÉREZ/ GORKA R. PÉREZ, Madrid
Fumata blanca en la negociación entre Gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. Tres días después de que la última reunión acabase sin pacto, y

dos de que la negativa de la patronal a la última propuesta impidiera que el Consejo de Ministros aprobara su prolongación, los negociadores lograron ayer un acuerdo. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y el presi-

dente de la CEOE, Antonio Garamendi, limaron asperezas en cuanto al volumen y la dirección de las exoneraciones, y CC OO y UGT secundaron luego un contrato que se firmará hoy en un consejo extraordinario.

Una llamada de teléfono a primera hora de la tarde sirvió para que tanto Escrivá como Garamendi, que habían protagonizado un duro cruce de declaraciones en diversas entrevistas durante toda la jornada de ayer —el líder de los empresarios llegó a acusar al ministro de “falta de sensibilidad”—, rebajasen la intensidad de sus diferencias y llegaran a un entendimiento. Tanto fuentes del Gobierno como de los empresarios apuntan que ambas partes se mostraron dispuestas a ceder en algunas de sus pretensiones, en vista de la inminente caducidad, el 31 de mayo, del marco vigente para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en los que ahora se encuentran amparados 600.000 trabajadores.

A pesar de que el pacto final no significa que ni Gobierno ni empresarios —acompañados por los sindicatos e incluso por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz— hayan renunciado del todo a su posición inicial, si que se han rebajado las pretensiones para hallar un punto de encuentro. Siguen ahí el pretendido incentivo para la recuperación de trabajadores que defendía Escrivá y el esquema de protección para quienes sigan en ERTE.

Fuentes de Seguridad Social aseguran que el ministro ha hecho “un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo”. “Nuestra idea de incentivar la activación parece que ha sido finalmente comprendida”, celebran. Fuentes de la CEOE señalan que su comité ejecutivo “ha dado el visto bueno por unanimidad a la última propuesta, al entender que se adecua a las necesidades de las empresas, especialmente para aquellas que peor situación y perspectivas para los próximos meses tienen”. Al mismo tiempo, aseguran que este acuerdo hasta el 30 de septiembre “requerirá pulsar hasta entonces la evolución de la pandemia y de la crisis económica para prolongar o adoptar en su caso nuevas medidas de apoyo”.

La última oferta lanzada por Escrivá mantiene las exoneraciones vigentes para los meses de junio, julio y agosto (85% y 75% en función del tamaño) para aquellos trabajadores que se encuentran acogidos a un ERTE, y las rebaja en septiembre (70% y 65%). Pero también eleva las de quienes salen de él para regresar a su puesto de trabajo (95% y 75%, respectivamente).

Este plan de estímulo —similar al que se empleó a comien-



El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en Madrid, en la presentación del plan de internacionalización de la economía española. / J. HELLÁN (EP)

La renovación de las ayudas para autónomos sale adelante

La resolución de la prórroga de los ERTE no fue el único fleco que se despegó durante la jornada de ayer. La continuidad del marco de prestaciones para el colectivo de trabajadores autónomos —de más de tres millones de personas— también fue acordada por Gobierno y las organizaciones que representan a los agentes sociales. “A falta de cerrar algunos detalles y conocer el texto por escrito, el compromiso del Gobierno incluye recuperación de la prestación extraordinaria sin restricciones por agotamiento de perio-

dos cotizados, garantizar acceso a las prestaciones a quienes tributen por módulos y ampliación a siete meses el requisito de cotización previa para la prestación de autónomos temporales”, anunció María José Landaburu, secretaria general de Utae.

“Durante los últimos días hemos estado acercando posturas, pero a lo largo del día de hoy [por ayer] han fructificado. Nadie se va a quedar atrás. Todos los que lo necesitan van a seguir cobrando la prestación. Esto demuestra que dialogando es como se consi-

gue llegar a acuerdos”, amplió, por su parte, Lorenzo Amor, presidente de ATA.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también se felicitó por la prolongación de unas partidas que se extenderán hasta el 30 de septiembre, y a la que podrán recurrir todos aquellos autónomos que hayan visto afectada su actividad por la covid. Dentro de la amalgama de prestaciones, aquellas que habían generado mayores enfrentamientos tenían que ver con las dedicadas a los autoempleados que optaban a ellas para compatibilizarlas con su actividad. La voluntad inicial del Ejecutivo de endurecer los requisitos, a falta de que se conocieran los detalles, ha quedado finalmente atrás.

la fecha de finalización de la anterior.

“Creo que es una gran noticia para centenares de miles de trabajadores y de empresas, y que debe de dar paso a una recuperación económica que tiene que ir de la mano con la vacunación”, apuntó, tras cerrarse el pacto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “Ha sido un acuerdo difícil que se hubiera podido alcanzar sin tanta dedicación de recursos públicos, pero es una magnífica noticia”, se sumó Unai Sorro, secretario general de CC OO.

El FMI pide a los países europeos más inversión en alquiler social

J. L. ARANDA, Madrid

El abaratamiento de los alquileres en la pandemia de coronavirus no pondrá las cosas más fáciles a los inquilinos. Al contrario, y como efecto de una crisis que también se salda con más paro y menos ingresos para los hogares, pagar la renta resultará cada vez más complicado. El efecto es conocido para el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en un trabajo publicado ayer en su blog recuerda que no habrá recuperación económica sin prestar atención a este problema y pide a los países europeos que adopten medidas de alivio para los arrendatarios.

Ya antes de la pandemia, señalaban los autores del informe, la presión para pagar las rentas crecía. España no sale bien en la foto: en 2018 era el segundo país donde los inquilinos del quintil más pobre (el 20% de hogares con menos ingresos) tenían que destinar más porcentaje de su renta disponible a pagar el alquiler, por encima del 45%.

La situación no se ha aliviado con la crisis. “Se espera que la pandemia empeore la accesibilidad de los alquileres y las tendencias a la desigualdad ya presentes antes de que la covid-19 golpease a Europa”, alertan los autores. ¿Qué soluciones hay? Para los investigadores, los fondos de recuperación europeos “proveen la oportunidad de hacer inversiones en vivienda social y en infraestructuras públicas como parte integral de la estrategia de recuperación”. Entre las medidas distinguen entre el corto y el largo plazo.

Subvenciones

En el primer caso, apuntan a ampliar las subvenciones a los inquilinos más vulnerables, lo que caracterizan como “la herramienta política inmediata más poderosa”. Los economistas del FMI piden que las ayudas sean fácilmente trasladables para ayudar a la movilidad geográfica. También hablan de los controles de precios —en sentido muy amplio— aunque expresan dudas sobre su eficacia si se reduce la oferta de casas en alquiler.

A largo plazo, está claro que el FMI apuesta por ampliar el número de pisos en arriendo y para ello sugiere penalizar la vivienda vacía, gravándola fiscalmente. También pide ampliar el parque de viviendas sociales. “Los gobiernos deberían invertir más en alquileres sociales, especialmente donde el stock ha caído o donde este es bajo”, reza el informe. Este último es el caso de España, con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de Europa.